



Proceso	Ejecutivo
Demandante	Teodora Hilda García Padilla
Demandado	William Correa Barrientos
Radicado	05088 31 03 002 2012 00008 01
Instancia	Segunda
Procedencia	Juzgado 2 Civil del Circuito de Bello (Ant.).
Ponente	Luís Enrique Gil Marín
Asunto	Interlocutorio No. 071
Decisión	Declara inadmisible apelación de auto
Tema	Solo es apelable el auto que resuelva sobre una medida cautelar, o fije el monto de la caución para decretarla, impedirla o levantarla (Art. 321-8 del C.G.P.). Contra autos solo procede el recurso de apelación cuando expresamente esta autorizado.

TRIBUNAL SUPERIOR

SALA SEGUNDA DE DECISION CIVIL

Medellín (Ant.), nueve de junio de dos mil veintitrés

Por auto proferido el 16 de noviembre de 2021, el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE BELLO (ANT.), negó la insistencia en la media cautelar y la elaboración de un nuevo oficio, toda vez, que el oficio correspondiente al decreto de la cautela fue librado desde el 08 de abril y retirado el 21 de abril de 2021; solicitud que

radicó la parte actora en el presente proceso Ejecutivo promovido por la señora **TEODORA HILDA GARCÍA PADILLA**, contra el señor **WILLIAM CORREA BARRIENTOS**.

Contra esta decisión la ejecutante interpuso el recurso de reposición y, en subsidio, apelación; en proveído del 15 de febrero del presente año, se resolvió desfavorablemente la reposición y, en subsidio se concedió el recurso de apelación.

Al efecto, observa el Tribunal que el recurso es improcedente, como pasa a exponer.

Por auto del 14 de julio de 2012, se libró mandamiento de pago a favor de la señora Teodora Hilda García Padilla y en contra del señor William Correa Barrientos; el 28 de septiembre de 2021, se solicitó el embargo y secuestro del 50% del bien inmueble distinguido con la matrícula inmobiliaria No. 001N-2580862 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Norte; no obstante que en la anotación 16 el bien tiene afectación a vivienda familiar a favor de los señores Paula Andrea Ochoa Gómez y William Mauricio Barrientos, se extinguió de pleno derecho por el fallecimiento de la señora Ochoa Gómez cónyuge del ejecutado, como lo establece el parágrafo 2 del art. 4 de la Ley 258 de 1996; en proveído del 02 de marzo de 2021, se decretó el embargo solicitado, el cual fue comunicado a la mencionada oficina de registro, por oficio No. 130 del 08 de abril adiado; según nota del 31 de mayo de 2021, se devolvió sin registrar porque: *"Sobre el bien inmueble objeto de*

embargo se encuentra vigente afectación a vivienda familiar (Art. 7 de la ley 253 de 1996)."

La parte actora solicita e insiste en que se elabore un nuevo oficio, para que expresamente se indique que la afectación a vivienda familiar se extinguió por ministerio de la ley, con ocasión del fallecimiento de la consorte del ejecutado, como consta en el registro civil de defunción aportado; el Juzgado en proveído del 16 de noviembre de 2021, no accedió a lo solicitado porque el oficio correspondiente al decreto de dicha medida fue librado desde el 08 de abril y retirado el 21 de abril de 2021; contra esta decisión la parte demandante interpuso el recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, arguyendo que la orden de embargo fue devuelta sin registrar porque el bien inmueble está afectado a vivienda familiar; cuando solicitó la medida a más del certificado de libertad del inmueble allegó el registro de defunción de la consorte del demandado y precisó que por mandato legal la afectación de vivienda familiar que pesa sobre dicho bien se extinguió por el deceso de la cónyuge del accionado; que a pesar de lo anterior, en el oficio donde se comunicó la medida cautelar no indica que la afectación a vivienda familiar se extinguió por ministerio de la ley a raíz la muerte de la señora Paula Andrea Ochoa Gómez, copropietaria, beneficiaria de la afectación y consorte del ejecutado; por lo que solicita se expida un nuevo oficio con las modificaciones y aclaraciones del caso.

El 15 de febrero del presente año, el Juzgado despachó desfavorablemente el recurso de reposición y, en subsidio concedió el de alzada; aduciendo que no hay lugar a reponer

la decisión porque se cumplió con la carga correspondiente, esto es, expedir el oficio de embargo; el cual fue retirado sin reparo alguno y entregado a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín - Zona Norte; medida que no fue registrada porque el inmueble tiene afectación a vivienda familiar; lo que llevó a solicitar la expedición de un nuevo oficio para que se indique que por mandato legal la afectación a vivienda familiar se extinguió por el fallecimiento de la beneficiaria; petición que fue negada en el auto objeto de recurso; que no hay lugar a reponer dicha decisión, toda vez, que se cumplió con la carga que correspondía, y el hecho de que el oficio se haya devuelto sin registrar corresponde a una actuación administrativa ajena al Juzgado y frente a la cual no tiene injerencia alguna, y la parte interesada pudo interponer los recursos correspondientes, para que la cautela fuera registrada; además, en el presente trámite ejecutivo no se puede pronunciar frente a este tema y, mucho menos expedir un oficio poniendo dicha situación de presente, dado que no es el juez competente para ello, como lo manda el art. 4 de la Ley 258 de 1996.

Del anterior recuento de actuaciones, se constata que frente al auto que decretó la medida cautelar consistente en el decreto del embargo del bien inmueble distinguido con la matrícula inmobiliaria No. 001N-2580862 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Norte; no se presentó recurso alguno; la inconformidad del extremo activo se presenta contra el auto proferido el 16 de noviembre de 2021, que negó la solicitud para que se librara un nuevo oficio donde se indicara expresamente que la afectación a vivienda familiar que recae sobre el inmueble de propiedad

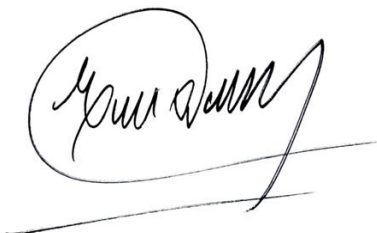
del demandado, se extinguió por ministerio de la ley con ocasión del fallecimiento de la consorte de éste, como aparece en el registro civil de defunción adosado al plenario. Como se puede advertir, no se resolvió sobre una medida cautelar, ni se fijó el monto de la caución para decretarla, impedirla o levantarla como lo manda el numeral 8º del art. 321 del C.G.P.; pues en verdad, la inconformidad recabe sobre el auto que resolvió sobre la expedición de oficio, el que no es susceptible del recurso de apelación.

Consecuente con lo expuesto, la **SALA SEGUNDA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN,**

R E S U E L V E

- 1.** Por lo dicho en la parte motiva, se declara inadmisibile el recurso de apelación interpuesto.
- 2.** Se ordena devolver la actuación a su lugar de origen, para que se continúe con el trámite correspondiente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Enrique Gil Marín', with a long horizontal stroke extending to the right.

LUIS ENRIQUE GIL MARÍN
MAGISTRADO